

La tuberculosis bovina salta al debate político por la negativa de la Junta a «sanear» explotaciones

En 79 de las 103 unidades veterinarias de Castilla y León no se ha registrado ni un solo caso positivo en el último año

SILVIA G. ROJO

SALAMANCA. La tuberculosis bovina llega a las Cortes de Castilla y León convertida en asunto político. Es la primera gran polémica del consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas (Vox), que tendrá que afrontar hoy la pregunta de Juan Luis Cepa (PSOE) por la elevada prevalencia de la enfermedad en Salamanca y la decisión de su departamento de no sacrificar reses en las explotaciones afectadas.

El consejero dijo que «lo importante, a corto plazo, es con-

trolar, no erradicar» esta enfermedad y los veterinarios, a través de su sindicato, han protestado porque entienden que se están produciendo injerencias políticas que se colocan por encima de los criterios técnicos. El consejero recibía ayer el apoyo de la Asociación de Ganaderos 19 de Abril: «Hasta ahora, la política sanitaria llevada a cabo al menos en la provincia de Salamanca, ha fracasado. El sacrificio masivo de animales ha supuesto un enorme daño para la cabaña ganadera, la genética y más aún, un daño económico para el ganadero».

El problema de la tuberculosis bovina se ha concentrado en Salamanca, fundamentalmente, en la Unidad Veterinaria de Vitigudino, donde en 2021 se detectaron 42 explotaciones positivas. Esta zona concentra más explotacio-



Prueba de tuberculosis realizada a una res. EL NORTE

nes positivas que siete provincias enteras de Castilla y León. Y es que mientras en la región la prevalencia en tuberculosis es del 1,34%, en Salamanca es del 2,53%, y la Unidad Veterinaria de Vitigudino se desmarca con un 5,04% o Béjar con un 5,25%.

«Hay 140 vacas, una está mal, ¿hay que matar las 140? No tiene ningún sentido», decía el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox) desde Lario, en León. Allí, una explotación se ha salvado de un vacío sanitario y de que todas sus vacas fueran al matadero. El brote afecta a otras tres explotaciones de Lario y Riaño y la opción no era sacrifi-

car unas 600 vacas. Según fuentes consultadas por este periódico, «la decisión ha sido consensuada con el Ministerio».

Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, advirtió la semana pasada de que no ha variado el protocolo no va a cambiar y que lo que varían son «las circunstancias objetivas y subjetivas» de cada caso, como el tamaño de la explotación, la cifra de animales infectados, la capacidad de aislamiento y el posible contacto con fauna silvestre que puede hacer circular la tuberculosis. El portavoz avanzó que esa decisión de no sacrificar los animales no es inamovible.

TUBERCULOSIS BOVINA

Qué es: Enfermedad crónica, de desarrollo lento. Puede contagiarse entre animales domésticos y silvestres, también a las personas, por inhalación o por consumo de leche no pasteurizada.

Prevalencia: 79 de las 103 unidades veterinarias de Castilla y León tienen cero casos en el último año. Vitigudino es la zona con más positivos.

El objetivo desde hace años es erradicar la enfermedad y en esa línea se trabaja. De hecho, se ha empezado a calificar para la declaración de oficialmente libres de tuberculosis bovina cuatro provincias de Castilla y León (Burgos, León, Valladolid y Zamora).

La normativa europea obliga a la realización del saneamiento ganadero «porque los animales infectados son un foco de contagio para otras ganaderías y para el hombre; porque tienen un menor rendimiento productivo y porque la presencia de la enfermedad en las explotaciones conlleva restricciones comerciales a los animales y los productos procedentes de estos».

Un total de 79 unidades veterinarias de las 103 en las que está dividida Castilla y León no han tenido ni un solo caso de tuberculosis el último año.

Muere en Palencia un oso despeñado tras una pelea con una hembra a la que se busca

La Junta cree que la osa, que intentaba defender a su cría, está gravemente herida

RICARDO S. RICO

PALENCIA. Fueron aficionados a la observación de la fauna los que dieron la voz de alarma en la tarde del domingo, cuando con telescopios divisaron cómo un oso en celo atacaba a una osa, que estaba con su cría, en el entorno de la Peña de Santa Lucía, entre Santibáñez de Resoba y Vidrieros, y cómo los dos ejemplares adultos acababan despeñados por un gran cortado de varias decenas de metros. Rápidamente pusieron el suceso en conocimiento de la Junta, que montó un operativo integrado por personal técnico, agentes medioambientales, veterinarios, celadores de medio ambiente y Patrullas Oso de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta, con la ayuda de la Guardia Civil y de personal de campo de la Fundación Oso Pardo, para rastrear la zona en busca de los dos osos despeñados, pero oscureció sin que la búsqueda tuviese resul-



Personal de la Junta, con el oso adulto muerto en la caída. FOTOS JCVL

tado. A primera hora de la mañana de ayer se reanudó ese operativo dirigido por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y se divisó primero a la cría de la osa, sana y salva pero sola, y poco más tarde se localizó al macho adulto muerto, con un peso de 217 kilogramos.

También se hallaron restos de sangre que llevaban a una oquedad donde se presume se refugió la osa, sin que se conociera todavía al cierre de esta edición si está muerta, pero sí cuando

menos herida grave a tenor de los restos de sangre que se encontraron en el lugar.

«Se ha monitorizado el interior de la cueva con un equipo remoto priorizando la seguridad de todo el operativo, y se está barajando entrar si no aparece, pero hay que tener mucha precaución porque un oso herido es muy peligroso. Además, hay una buitrera pegada al lugar donde han caído», comentaba ayer por la tarde el presidente de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero.

La ganadería afectada por la guerra de Ucrania recibe 37,5M€

VALLADOLID

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana las bases reguladoras del paquete de ayudas a los sectores ganaderos afectados por las consecuencias de la guerra de Ucrania por un valor total de 193 millones de euros, de los que 35.716.688 euros irán a parar a Castilla y León, 11.150.393 euros serán para Castilla-La Mancha, 2.832.866 euros los recibirán los ganaderos navarros y 1.254.023 euros se destinarán a La Rioja, según informaron a Ical fuentes gubernamentales, informó Ical.

Los sectores destinatarios de estas ayudas, de las que 64,4 millones serán financiados por la Unión Europea y los 128,9 millones restantes los aportará el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, fueron decididos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en conjunto con las comunidades autónomas y las organizaciones sectoriales.

Como ejemplo de aplicación de estas ayudas, una explotación tipo de vaca nodriza con 20 cabezas podría percibir algo más de 1.000 euros, hasta un máximo de 1.200. En el caso de las de 60 cabezas, se superarían los 3.156 euros, hasta un máximo de 3.600.

En relación al engorde de terneros, la mayoría de cebaderos de Castilla y León, que son de un tamaño de entre 21 y 100 animales cebados al año, recibirán una media de 970 euros, con un máximo de 1.200 euros. Las explotaciones de tamaño medio, de entre 101 y 500 animales, que en Castilla-La Mancha son el 50 por ciento de las existentes, recibirán una media de 4.850 euros, con un máximo de 6.000.

Para una explotación tipo de ovino de carne en Castilla y León, con un tamaño medio de 300 animales, el importe de la ayuda sería de 1.245 euros por explotación, con un importe máximo de 1.500 euros, mientras que para las explotaciones de tamaño medio de avicultura, con una capacidad de unos 40.000 pollos, cobrarían un máximo de 2.500 euros. Por último, en el sector cunícula, la ayuda para una explotación tipo de Castilla y León, de en torno a 1.000 conejas, podría llegar a un máximo de 5.160 euros.

El Gobierno ve a Siro en «situación crítica» y la Junta insiste en el diálogo

► Barcones advierte de que «hay muy poco tiempo» para encontrar una solución y Carriedo llama a que empresa y trabajadores negocien

I. JIMENO/ABC
VALLADOLID

Como «crítica» reconoció ayer la delega del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que es la situación de Siro en Castilla y León. «Hay muy poco tiempo» para encontrar una solución que permita mantener a flote la galletera, que acumula una deuda de unos 300 millones de euros. El viernes se precipitaron aún más los hechos. A última hora de la tarde, Ceralto Siro Foods trasladó a los trabajadores que en breve paralizaría la actividad productiva de todas sus plantas en la Comunidad dado que el socio inversor que estaría dispuesto a inyectar unos 180 millones de euros a cambio de hacerse con el 75 por ciento del accionariado «no está en disposición de proceder al cierre de la operación» ni acometer la inversión prevista dado que los empleados han rechazado al plan de viabilidad presentado.

Barcones defendió que el Gobierno lleva «muchos meses implicado en la crisis de Siro» para buscar una solución financiera inversora y que «mantenga el empleo, las condiciones y la actividad productiva». Y este fin de semana lo han estado haciendo «porque el escenario lo requiere». Y de paso volvió a cargar las tintas sobre la Junta de Castilla y León, a la que acusó de haber reaccionado de «manera muy distinta» ante situaciones similares en otros momentos y censuró que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, haya convocado «reuniones parciales» en alusión a la cita el próximo miércoles con los representantes de los trabajadores y los alcaldes de los municipios afectados.

Desde la Junta, su consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, también reconoció «las dificultades» que «están planteadas encima de la mesa», así como los trabajos llevados a cabo hasta el momento. El también portavoz del Ejecutivo autonómico animó a la dirección de la compañía y al comité de empresa a que «alcancen un acuerdo que permita asegurar el futuro de Siro» y que «permita a los posibles inversores llevar a cabo esa inversión».

«Si esto se consiguiera, podríamos plantearnos la persistencia de Siro y su crecimiento en el futuro», apuntó Carriedo, quien brindó la Fundación Anclaje para intentar el entendimiento entre las partes. Esta entidad pública

sin ánimo de lucro «en plena disposición» de intervenir «si cada uno de los patronos estima oportuna su convocatoria», incidió el también portavoz del Ejecutivo autonómico. «Naturalmente, si tanto los sindicatos como los empresarios están conformes con que se pueda llevar a cabo una convocatoria lo haríamos», recalcó Fernández Carriedo en declaraciones recogidas por lcal antes de participar en la jornada informativa 'Oportunidades de Fondos Next Generation en Castilla y León' organizada por El Mundo-El Correo de Burgos. Eso sí, destacó que «lo básico y lo fundamental» es que en este momento se pueda disponer de un acuerdo de competitividad.

«Ocurrencia»

La llamada a recurrir a la Fundación Anclaje no recibió igual respuesta desde los sindicatos que desde los empresarios. Como una 'patada' parece que sentó en las centrales sindicales. CC.OO. y UGT recriminaron ayer no sólo que la Junta «llega tarde» en su intervención para salvar las industrias de Siro en la Comunidad, sino que lo tacharon de

«ocurrencia» y recordaron que la Junta también es patrono de la Anclaje. Mientras, CEOE Castilla y León apuntó que desde la patronal entienden que debe ser la empresa quien solicite una reunión de la Fundación e incidieron en que si la compañía no quiere solicitarlo, no suelen tomar esa iniciativa, aunque «respetando la voluntad» de Siro, cualquier patrono, Junta, sindicatos y patronal puede solicitar la reunión.

También el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, pidió ayer trabajar juntos para buscar una solución a esta crisis, a la vez que afeó el momento en el que Mañueco ha convocado la reunión «al límite» y cuestionó que llegue cuando «no podamos hacer nada».

Ayer, lo que los trabajadores consideraban un «órdago» se convirtió en realidad y en la galletera de la localidad palentina de Venta de Baños ya ni siquiera encendieron el horno. Es la planta para la que el plan de viabilidad incluye su cierre. Y aunque los trabajadores se despidieron el viernes dejando todo preparado para arrancar de nuevo el lunes, ayer el turno de ma-

ñana que entró únicamente se dedicó a hacer labores de limpieza. Ni una galleta se horneó en las instalaciones, para las que los trabajadores se niegan a creer que sea ya su final tras cuarenta años de actividad. Ayer, según reconoció la presidenta del comité de empresa, María del Mar Rodríguez, tenían la duda de si hoy tampoco arrancarían con la producción.

Incertidumbre también en el resto de plantas. Otra de las factorías en Venta de Baños tenía planificado un paro con el objetivo ejecutar labores de desinfección esta semana, por lo que no saben cuándo y si finalmente se materializa la intención de la compañía de paralizar la actividad productiva y «únicamente gestionar la caja con el stock de producción terminado». En Toro (Zamora), ayer en era festivo, así que no trabajaron.

Los representantes de los trabajadores quieren abordar de forma conjunta lo que planteará al presidente de la Junta mañana, aunque desde la de Venta de Baños «sobre la que pende el cierre» insisten en que «nuestro problema es más grave». «No estamos en la misma situación», pues la viabilidad de su planta no entra ni siquiera en los planes del plan de competitividad, con el que se sienten «engañados». «Nos ofrecen unas condiciones para que nos vayamos voluntariamente», censuró la presidenta del comité de empresa.

La compañía cumple su órdago y no arranca la actividad en la planta de Venta de Baños que quiere cerrar



Exterior de las instalaciones de la galletera de Siro en Venta de Baños (Palencia), ayer sin actividad productiva // I. TOMÉ

Los sindicatos alertan de que no queda tiempo para que Anclaje salve a Siro

Ven la reunión convocada mañana por Mañueco como un 'gesto' ante la presión de la oposición / La galletera de Venta de Baños, primera factoría en parar la producción al quedarse sin materia prima

SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID
Grupo Siro entra en una carrera contrarreloj en la que cada día que pasa se empaña más su futuro. Tanto, que los sindicatos ven inviable la intervención de la Fundación Anclaje, propuesta ayer por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

«Valoramos mucho un instrumento como la Fundación Anclaje, pero la propuesta no tiene recorrido. Ya no hay tiempo para convocarla y cumplir todos los trámites necesarios para poner ese mecanismo en funcionamiento. No tiene la suficiente agilidad», lamentaron ayer, en respuesta a este periódico, fuentes sindicales. «Lo que es necesario es comprobar primero si los inversores se han ido del todo o se han ido 'solo un poco', y abrir alguna línea de financiación muy rápida que haga posible la continuidad de la producción. Y estudiar cómo, porque la Administración tampoco puede dar ayudas indiscriminadas».

En cuanto a la reunión que tendrá mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con los representantes de los comités de empresa, un portavoz de los trabajadores señala que la situación «ha llegado a un punto, con reproches de unos políticos a otros, en el que hay una carrera entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno Central para ver quién es el que más hace y quién el que menos». Por eso muchos pasos se dan «de cara a la galería, como el encuentro de mañana que ha convocado Mañueco para quitarse la presión de la oposición».

Y es que, señala la misma fuente, «va a ser un contacto sin sindicatos y sin asesores, solamente van a estar los presidentes y presidentas de comités. Es un tema gestual y no se va a negociar nada».

La situación va empeorando y ayer paró la producción de la primera de las factorías del grupo en la Comunidad, la galletera de Venta de Baños cuyo cierre, que afecta a 197 trabajadores, fue el primero en anunciar. «A los operarios no les han dejado ni entrar esta mañana. En los próximos días irán parando las demás fábricas, según se vayan quedando sin materias primas para producir, para no generar más deuda».

Ayer se reunió el comité de Aguilar de Campoo, en Palencia, y hoy hará lo mismo el de la factoría de la localidad zamorana de Toro. No se ha anunciado ninguna decisión a tomar y se espera que se acuerden las propuestas a plantear de cara a la reunión con Mañueco.

El anuncio de la retirada de los fondos de inversión asociados *Afen-*



Trabajadores de Cerealto Siro en la localidad palentina de Venta de Baños. ICAI

dis Capital Management y *Davidson Kempner* —el primero turco y el segundo norteamericano—, que iban a comprar el 75% de la compañía y hacer frente a una deuda acumulada de 300 millones de euros, pone al gigante de la alimentación contra las cuerdas. Un gigante que da empleo a más de 1.500 personas en la Comunidad.

COMPETITIVIDAD

Carriedo aseguró ayer en Burgos que la Fundación Anclaje está «en plena disposición» de intervenir en el conflicto de Siro entre empresa y trabajadores «si cada uno de los patronos estima oportuna su convocatoria». Sin embargo, destacó que «lo básico y lo fundamental» es que en este momento se pueda disponer de un acuerdo de competitivi-

dad, tras recordar «el trabajo y las dificultades» que están «planteadas encima de la mesa», apuntó en declaraciones que recogió Ical. En esa línea, Carriedo animó a la dirección y al comité de empresa para que «alcancen un acuerdo que permita asegurar el futuro de Siro».

No tardó el consejero en recibir contestación. El secretario de Ceoe Castilla y León, David Esteban, destacó por su parte que debe ser la empresa Siro la que solicite una reunión con la Fundación Anclaje, «para conocer qué puede poner la Junta sobre la mesa para tratar de solucionar la crisis».

El secretario autonómico de la Federación de Industria de CCOO en la Comunidad, Gonzalo Díez, y la secretaria de Acción Sindical de

Ugt-Fica Castilla y León, Sandra Vega, asumieron «con sorpresa» el anuncio del consejero, y consideraron que la Junta «llega tarde» en su intervención para salvar las industrias de Siro y exigieron que se ponga a remar «de la mano con el Gobierno, los sindicatos y la empresa».

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, aseguró en Palencia que el Gobierno lleva «muchos meses implicado en la crisis de Siro con el objetivo de buscar una solución financiera», mientras el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, pidió «trabajar juntos» y afeó al presidente del Ejecutivo autonómico que haya convocado una reunión justo cuando hay una pregunta suya en el Pleno de las Cortes.

La fábrica de Aguilar de Campoo convoca concentración el domingo

S. G. C. VALLADOLID
El comité de empresa de la fábrica de Cerealto Siro Foods en Aguilar de Campoo decidió ayer convocar una concentración de protesta de la plantilla para el próximo domingo. La decisión se tomó en el transcurso de una reunión para tratar los argumentos fundamentales de la factoría en la reunión de mañana con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuyas conclusiones no han trascendido. La factoría de Agui-

lar de Campoo fue la única cuya plantilla aceptó el plan de competitividad propuesto por los inversores *Afendis Capital Management* y *Davidson Kempner*. En la jornada de hoy es el comité de empresa de Toro el que tiene previsto reunirse.

La concentración del próximo domingo será la segunda convocada por la plantilla, tras la celebrada el pasado domingo en Venta de Baños, en la que los vecinos de la localidad palentina desbordaron la Plaza de la Constitución. El

buen tiempo favoreció la afluencia masiva de los vecinos que, como aseguró la presidenta del comité de empresa de la factoría, dependen mayoritariamente del empleo de Siro para poder subsistir.

La factoría de Siro en Aguilar de Campoo es la antigua fábrica de la emblemática marca Fontaneda en la localidad palentina. En la actualidad produce galletas, cereales de desayuno, barritas de cereales y productos sin gluten, sobre todo pan y galletas. La plantilla es de 330 trabajadores.

Un grupo inversor retira su oferta sobre la compañía,
que detiene su actividad en Castilla y León

La guerra de las galletas Siro agrieta Venta de Baños

JUAN NAVARRO, Venta de Baños
El InfoJobs de Venta de Baños (Palencia, 6.300 habitantes) consiste en unos folios pegados en el centro cívico: maquinista, mecánico, carnicero en Palencia o hasta limpiador de cristales en Holanda. Lejos queda la bonanza que traía la fábrica de galletas Siro, que endulzaba desayunos y nóminas hasta que todo comenzó a torcerse. Ahora mandan el amargor y la expectación. Las plantas de Siro en Castilla y León se han detenido hasta que se resuelva si el grupo inversor que aspira a comprar la compañía da el paso. Las condiciones que ha planteado no gustan pero la alternativa es el cierre, que haría perder 700 trabajos en Venta de Baños y 3.000 en la comunidad. Una catástrofe en una tierra muy castigada por la desindustrialización.

Las caras largas de varios integrantes del comité de empresa de Siro en la localidad, liderado por el sindicato UGT, acreditan la gravedad. El pasado octubre comenzaron unas reuniones con la empresa para negociar un plan de competitividad, pero las condiciones no convenían. Tardaron meses en tener novedades y estas llegaron en forma de eufemismos, según destaca Mónica de la Sierra: "El 30 de mayo nos comunicaron el traslado de la actividad productiva, no el cierre como tal, y el desplazamiento de la plantilla". Esto implica que 197 personas tendrían que moverse, en peores condiciones, a las otras plantas de Siro en el territorio: Aguilar de Campoo (Palencia) o Toro (Zamora), en ambos casos a más de 100 kilómetros del lugar. A unos 30 trabajadores de las oficinas, directamente, "les invitaban a irse con una baja voluntaria".

Los comunicados de la compañía también han molestado porque acusan a la plantilla de un ausentismo muy superior al del resto de fábricas, y de mayores



De izquierda a derecha: Miguel Ángel Calzada, Mónica de la Sierra, Yolanza Maza, y Elisa Limones, representantes de los trabajadores del Grupo Siro. / JUAN MERCÉ

costes laborales, algo que ha reprochado la presidenta del comité, Mar Rodríguez, asegurando que las estimaciones están manipuladas: "Pensábamos que esta estrategia era un órdago de Siro pero ahora vemos que es un órdago de los inversores". Ayer los empleados fueron a las instalaciones, aun sabiendo que la producción estaba paralizada. "Había gente llorando, preocupada, estamos en shock", lamenta María Garrote, de UGT. Los almacenes, en cambio, siguen operativos. Enfrente, un operador de un taller contempla la situación: "Es muy triste, están quitando puestos de trabajo donde ya hay pocos". De momento los perjudicados siguen esperando mensajes de la compañía, cuyo gerente, Luis Ángel López, avisó de que "el inversor no está

en disposición a proceder al cierre de la operación en los términos previstos en el acuerdo". "Decidimos parar la actividad productiva y gestionar la caja con el stock de producto terminado que tenemos", añadió.

El nerviosismo se nota, también en la tienda exterior, que vende esos macarrones al huevo, cereales de chocolate, galletas o bollería variada que se fabrica unos metros más atrás. "Viene la gente preguntando como si supiéramos algo", le expone la vendedora a la clientela. Palencia tiene en el sector del cereal uno de sus grandes motores económicos, con importantes empresas en el norte y el sur de la provincia. En las proximidades de Venta de Baños se encuentra una fábrica de Renault, en Villamuriel de Cerrato, cuya

La empresa emplea
en el pueblo a 700
personas, y a 3.000
en la comunidad

"Luego hablamos
de la España
vaciada", señala
una sindicalista

actividad resulta clave para el sostenimiento de la zona.

El alcalde ventabañense, José María López (PSOE), agradece la implicación de alcaldes cercanos y población que este fin de semana se manifestaron en la plaza. El regidor asume que él apenas tiene capacidad de influencia y que "depende del inversor". Que Siro, que cumple medio siglo en esos suelos, deje de operar supondría una catástrofe: "No concebimos el pueblo sin la galletera".

"Nos vamos a la calle"

El pesimismo cala entre los integrantes sindicales, pues Miguel Ángel Calzada, Elisa Limones y Yolanda Maza coinciden con las opiniones de los representantes del comité. "Vamos, que nos vamos a la calle", musita Limones, que define como "lentejas" el ofrecimiento de Siro: "O lo tomas o lo dejas". De la Sierra critica que la Junta de Castilla y León ha tardado mucho en reaccionar y que en los primeros compases del enfrentamiento ni respondió a los intentos de reunirse con los portavoces de la plantilla de Siro. Este miércoles el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha citado en las Cortes, en Valladolid, a los regidores de los municipios donde se ha detenido el funcionamiento de Siro. Los sindicalistas se quejan también que desde que empezó el conflicto han empezado a cobrar las mensualidades con retraso: "Y este mes ni lo olemos".

La dirección de la marca ha instado a que "debe imperar la realidad sobre la emoción". El presidente del Grupo Siro desde 1991, Juan Manuel González Serina, también vicepresidente de Iberdrola, fue nombrado hijo predilecto del lugar, pues el empresario compró Siro a Danone y multiplicó su actividad. Hoy se limita a remitir al comité a los nuevos inversores y contestar con un sobrio "no está en mis manos".

"Luego hablamos de la España vaciada pero esto es un perjuicio para quienes estamos y para los que vienen", dice Mónica de la Sierra. También tiemblan los bares y comercios cercanos al parque industrial. En el pueblo, María Ángeles Vadillo, que a sus 80 años ha visto el auge y decaimiento de este entorno del Cerrato palentino, lo resume: "Si cierran, nos dejan sin comer y ya está. ¿Y qué le vamos a hacer, hijo?".



RUIDO BLANCO

JORGE
FRANCÉS

Jugar al desgaste

La ausencia pública de Vox ante el primer problema real del mandato es ese desgaste que espera paciente Mañueco

Si algo aprendió Alfonso Fernández Mañueco de la pasada legislatura, la de Ciudadanos, la de la pandemia, la del amago de reforma sanitaria... es que en la política de coaliciones sale rentable jugar al desgaste. Entonces dejó embarrarse a sus exsocios hasta el codo con una propuesta de atención rural que nacía con un fuerte rechazo social y de los sindicatos sanitarios. Ahora, con Vox en el Colegio de la Asunción, sigue la misma estrategia que resumió tan bien Napoleón diciendo aquello de «si el enemigo se equivoca, no lo distraigas». Porque las coaliciones también nos han enseñado que el mayor enemigo es aquel con el que has formado gobierno porque es el único con quien podrás disputarte los logros en la siguiente campaña electoral. El primer problema real (nada de manidos y populistas debates ideológicos) al que se enfrenta Vox desde que gobierna es la crisis del Grupo Siro. Un conflicto de pésimas consecuencias para el empleo de nuestro necesitado mundo rural, aquel del que hicieron bandera verde en la «siembra» de campaña. Sin embargo, a pesar de haber ganado la consejería de Empleo, andan desaparecidos públicamente azuzando una sensación de orfandad ante un cierre inevitable.

Asegura el vicepresidente Gallardo que el equipo de Mariano Vegganzones se está empleando «a tiempo completo» en solucionar esta crisis. No tengo evidencias para dudarlo pero, aun si así fuera, Vox vuelve a olvidar que hay una parte esencial de gobernar que supone dar explicaciones, proponer soluciones y aplacar así el miedo. Porque la incertidumbre puede convertirse en protagonista inesperada de los acontecimientos y dar al traste con el resto de esfuerzos.

La ausencia pública de Vox ante el primer problema real del mandato es ese desgaste que espera paciente Mañueco. Tras varios días con el consejero desaparecido mientras se agolpaban los acontecimientos preocupantes para Siro, el presidente toma el mando y vuelve enderezar el barco. Mañueco ofrece gestión frente a consignas en plena campaña en Andalucía dejando, por primera vez en cueros, la capacidad de los de Abascal para echarse al hombro los problemas.

Ucrania rechaza el preacuerdo entre Rusia y Turquía para la exportación de cereales

El Gobierno de Kiev no acepta la exigencia de Moscú de inspeccionar los buques mercantes para controlar el tráfico de armas

RAFAEL M. MAÑUECO
Corresponsal

MOSCÚ. Rusia y Turquía, según la prensa rusa, habrían alcanzado gracias a la mediación de la ONU un acuerdo preliminar para desbloquear la exportación de cereales ucranianos a través de un corredor marítimo en el mar Negro desde el puerto de Odesa. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha ofrecido a ayudar a despejar la costa y a escoltar a los barcos que portan el grano, propuesta que apoya el primer mandatario ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, la agencia Bloomberg, que cita fuentes de la negociación, asegura que Ucrania rechaza el contenido del preacuerdo en su actual redacción.

Según el medio referido, el plan diseñado por Moscú, Ankara y Naciones Unidas contempla desminar las aguas en el entorno de Odesa y garantizar la salida segura de los barcos al mar Negro bajo los auspicios de la ONU. Pero Moscú exige poder inspeccionar los buques mercantes para evitar el tráfico de armas. Esta es una de las condiciones que Kiev, cuyos representantes no participaron ayer en las negociaciones, rechaza de plano.

Ucrania teme además que neutralizar las defensas costeras de Odesa dejaría desprotegido el puerto, a merced de un posible ataque ruso. A este respecto, Ankara confía en que la intervención de Naciones Unidas pueda contribuir a eliminar las preocupaciones de seguridad de las autoridades de Kiev.

Está previsto que mañana las partes se reúnan en Ankara en presencia del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, para rubricar definitivamente el acuerdo. Sin embargo, este lunes no se sabía si el Gobierno de Volodimir Zelenski enviará su delegación. A juicio de Taras Kachka, viceministro de Economía y representante en el área del Comercio de Ucrania, ahora «Rusia busca endosar a Ucrania la responsabilidad por la interrupción de los suministros». Según sus palabras, «el hecho es que la crisis alimentaria fue creada artificialmente por Rusia y solo por Rusia».

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, ha declara-

do a través de Twitter que Moscú no es de fiar. Según su punto de vista, «Putin dice que no usará las rutas comerciales para atacar Odesa, pero también aseguró que no pensaba invadir nuestro país. Sus palabras no valen nada».

La idea de Turquía, una vez despejado el mar frente al puerto de Odesa y también garantizada la salida de barcos, es establecer un centro en Estambul para el control y coordinación de la carga. Pero, según estiman fuentes de la Presidencia turca, cuando se haya

firmado el acuerdo «serán necesarias entre tres y cinco semanas para lanzar el operativo».

Transportado en trenes

La «operación especial militar» de Rusia en Ucrania está impidiendo que los cereales ucranianos lleguen a los mercados mundiales. Y este hecho, además de provocar la subida de su precio, amenaza con causar serias hambrunas en países del Tercer Mundo. De momento, el grano se está exportando en ferrocarril hacia los países

de la Unión Europea. Desde el inicio de la guerra el 24 de febrero, cerca de 22,5 millones de toneladas de cereales están bloqueadas en los puertos ucranianos, con la amenaza creciente de que terminen pudriéndose. Este país es el cuarto exportador mundial de trigo y maíz con casi el 10% del mercado.

El presidente ucraniano afirmó ayer que la cantidad de grano para la exportación bloqueada por la guerra podría triplicarse en otoño hasta llegar a los 75 millones de toneladas. «Ahora están bloqueados entre 20 y 25 millones de toneladas de cereales, y este otoño esta cifra podría ascender a 70 o 75 millones de toneladas». «Necesitamos corredores marítimos y lo estamos hablando con Turquía, el Reino Unido y la ONU; también con Polonia y los países bálticos para exportar el cereal en cantidades menores por ferrocarril», señaló Zelenski.

El Reino Unido enviará al país invadido sistemas de lanzacohetes

El Reino Unido anunció ayer que procederá al primer envío a Ucrania del sistema de lanzacohetes múltiple M270 –no concretó cuántas unidades– con un alcance de 80 kilómetros, muy por encima del arsenal que posee Kiev. «No podemos permanecer de brazos cruzados mientras la artillería de largo alcance rusa arrasa ciudades y mata a civiles inocentes», arguyó el primer ministro británico, Boris Johnson. Hace una semana anunció una medida similar. «Si la comunidad internacional sigue dando apoyo, creo que Ucrania puede ganar», destacó el ministro de Defensa británico, Ben Wallace.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se fotografía con varios soldados en su visita de ayer a los distritos de Bakhmut y Lysychansk. AFP

Muere Roman Kutuzov, el undécimo general ruso

D. MARTÍNEZ

Las tropas se anotan en Ucrania una nueva baja. Ha caído el undécimo general ruso, señalaron ayer las Fuerzas Armadas de Kiev. Es Roman Kutuzov, quien fue comandante del 29º Ejército de la Federación Rusa. Según el diario ucraniano 'KP', fue li-

quidado por fuego de artillería el domingo cuando dirigía en persona la ofensiva en el Dombás. El medio 'Ukrinform' apunta que murió en la ciudad de Mykoláivka, cerca de Popasna.

En el ataque, «algunas unidades de la 150ª División de Fusileros Motorizados del 8º Ejército Militar de la Federación Rusa

sufrieron pérdidas significativas». La citada web señala que «se trata de al menos el 50% del personal, las armas y el equipo».

Moscú, por su parte, solo ha reconocido oficialmente que Kutuzov es el cuarto general que pierde la vida en combate desde que dio comienzo su «operación especial militar» en Ucrania el 24 de febrero. La noticia la reportó la noche del domingo el corresponsal de guerra ruso Alexandr Sladkov, quien afirmó que Kutuzov murió junto con otros militares a los que coman-

daba durante una ofensiva.

Por otra parte, el comandante adjunto del regimiento especial checheno Kadrov, el teniente coronel Mezhed Utsmygov (apodado Mujahideen), resultó herido el jueves en la ciudad de Kamyshevakhka, ubicada en la región de Zaporíjia. «Utsmygov y sus militares instalaron un puesto de tiro en una vivienda para cubrir el paso de otros combatientes, pero comenzaron los bombardeos y un proyectil impactó en el inmueble», señaló un medio cercano al Kremlin.

«Si queremos descarbonizarnos hay que empezar por la energía»

EL MUNDO organiza junto con Endesa el encuentro sobre clima y pacto verde europeo

DIEGO G. CAMPO MADRID

Dentro del Pacto Verde Europeo se desgranarán las principales medidas de interés comunitario para que Europa alcance los objetivos que marca su transición ecológica. Estos culminarán en el año 2050, cuando la economía de la Unión Europea (UE) alcance la neutralidad de emisiones de carbono.

Con el objetivo de analizar las oportunidades que derivan de aplicar las políticas de descarbonización de la UE, EL MUNDO ha organizado junto a ENDESA el encuentro sobre clima y pacto verde europeo, ponencia en la que también han participado el Banco Santander, Ferrovial, Amadeus y Schneider Electric.

Por parte de Endesa, María Malaxechevarría, directora general de Sostenibilidad de la compañía eléctrica, quiso destacar «los dos ejes estratégicos» que la empresa ha marcado a fin de lograr los objetivos de neutralidad económica.

El primero de ellos se encuentra relacionado con la «descarbonización de su mix energético». En este sentido, Malaxechevarría anunció que Endesa ha adelantado sus planes de descarbonización «al año 2040», subrayando que desean «ser una empresa 100% renovable». En consonancia con esta primera me-

«El pacto verde nos convertirá en el primer continente neutro con el clima»

«En la actualidad, el 80% de todas las emisiones tienen un origen energético»

ta, la directora de Endesa asegura que tiene la intención de «ayudar a sus clientes para, entre todos, lograr esta neutralidad económica» lo antes posible.

Federico Gómez, director de Finanzas Sostenibles del Banco Santander, destaca el papel que las entidades financieras tendrán en la transición ecológica, ofreciendo apoyo a las empresas en sus proyectos sostenibles y reduciendo progresivamente la financiación a aquellos que resultan más contaminantes. «En el año 2050 nuestra cartera no va a emitir carbono, es decir, aquellas actividades que si lo emitan van a estar compensadas con otras que capturen los gases



CLARA DE LA TORRE. Directora general adjunta de la DG Acción por el Clima de la Comisión Europea.



FEDERICO GÓMEZ. Director de Finanzas Sostenibles del Banco Santander.

de efecto invernadero» subrayó.

Para ello, el Santander se ha propuesto reducir la cobertura a aquellas actividades que resulten más perjudiciales para el medio ambiente. «Vamos a tener que dejar de financiar aquellas actividades que resultan más contaminantes, a partir de 2030 no otorgaremos financiación a aquellas empresas energéticas cuyos ingresos provengan



LUCAS BOBES. Director de Sostenibilidad de la compañía tecnológica española Amadeus.



ANA PEÑA. Gerente de Sostenibilidad, Cambio Climático y Medio Ambiente de Ferrovial.

de actividades relacionadas con el carbono en cifras superiores al 10%», matizó.

En consonancia con las dos intervenciones anteriores, Ana Peña, gerente de Sostenibilidad, Cambio Climático y Medio ambiente de Ferrovial, desglosó las principales líneas de actuación de su compañía para cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea, desta-

cando la «potente estrategia» que la firma pretende implantar en consonancia con las directivas del acuerdo de París. «Estamos ya en un aumento de 1,1 grados de temperatura, en Ferrovial trabajamos para ver qué tecnología debemos impulsar dentro de nuestra cartera de clientes para así poder aportar las soluciones necesarias a este problema», explicó.



MARÍA MALAXECHEVARRÍA. Directora general de Sostenibilidad de Endesa.



JOAQUIM DAURA. Director de Energy & Sustainability Services. Schneider Electric.

Por parte de Amadeus, Lucas Bobes, director de Sostenibilidad, destacó las dos vías por las que la firma tecnológica desea reducir su huella sobre el medio ambiente. En primer lugar, explicó la importancia de «hacerse cargo de su propio impacto», remarcando el esfuerzo de Amadeus en contener su consumo eléctrico a la hora de ejecutar el tratamiento de datos a través de «medidas de eficiencia energética».

Además, el director de la compañía quiso hacer énfasis en la importancia de concienciar a sus clientes respecto a la huella de carbono. «Esta medida es la más importante para nosotros, nos encargamos de transmitirles la información suficiente para que sepan cual es la opción de viaje más sostenible», sostuvo.

Para Joaquim Daura, director de Energy y Sustainability services de Schneider Electric, la razón por la que se debe descarbonizar la energía atiende a la cantidad de emisiones que esta genera. «En la actualidad, el 80% de todas las emisiones tienen un origen energético. Si queremos descarbonizarnos, hay que empezar por la energía», explicó.

Entre las medidas propuestas por el director de Schneider Electric, destacan: «potenciar la eficiencia energética, el uso de las renovables y el autoconsumo, definir una estrategia de compra de energía y la electrificación». A su parecer, si no se implementan en su conjunto, «no vamos a ser capaces de descarbonizarnos».

Antes de que finalizase el coloquio, Clara de la Torre, directora general adjunta de la DG Acción por el Clima de la Comisión Europea, destacó la importancia de cumplir las pautas establecidas en el Acuerdo

de París, ya que, de lo contrario, las consecuencias podrían ser «irreversibles». «Cuanto más tiempo transcurre el margen de acción para tomar medidas va a ser más estrecho, los estudios ya nos hablan de los efectos que puede tener superar los 1,5 grados que se han establecido. El pacto verde nos convertirá en el primer continente neutro», afirmó.

Carriedo ve oportuno «reprogramar» los fondos europeos al contexto actual

Anima a las empresas a apoyarse en las ayudas europeas para su transformación

N. ESCRIBANO BURGOS

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, anima a las empresas a aprovechar las oportunidades que genera la llegada de fondos europeos. «Han surgido en un contexto de recuperación económica, después de una pandemia y es una ocasión de recuperar el PIB previo a la crisis sanitaria, pero también son una oportunidad para afrontar la transformación que tenemos por delante», asegura.

El responsable de las políticas económicas de la administración regional ha inaugurado la jornada informativa 'Oportunidades de Fondos Next Generation en Castilla y León', que han organizado Ibercaja y EL CORREO DE BURGOS.

El consejero ha presentado las novedades de la política del Gobierno autonómico de cara al aprovechamiento de estos fondos en el arranque de esta jornada, que cuenta con la participación del director territorial de Ibercaja en Burgos, La Rioja y Guadalajara, Jesús Les.

La cita se prolongó con una sesión informativa con Josefina Piñón, directora del departamento de Cooperación y Fondos Europeos de la consultora Mazars y Manuel Vaca de Osma, socio de esta misma firma.

Durante su intervención, Carriedo ha sugerido al sector empresarial que reoriente sus objetivos de futuro para adaptarse a las líneas de subvención de las convocatorias que están surgiendo y al contexto actual. En este sentido, ha puesto como ejemplo de línea que acaba de lanzar la Junta de Castilla y León para favorecer el autoconsumo energético.

Está dotada con 38 millones de euros y tiene como objetivo ayudar a reducir la factura energética para todos los sectores de la economía y, a la vez, garantizar la viabilidad de las empresas. Como apunta el consejero, «calculábamos que con los precios de la energía, la inversión se recuperaría en 5 años con el porcentaje de ayuda que se concede, sin embargo con la escalada de precios ahora se valora que en dos años estaría recuperada».

Carriedo, que felicita a los organizadores de esta jornada, recuerda la importancia de hacer difusión de los fondos europeos ya que inyectarán dinero a la economía de la provincia de Burgos y de toda la Comunidad Autónoma. «Tenemos que familiarizarnos con términos que van formando parte de nuestra vida cotidiana, pero se tienen que traducir en presentar proyectos y aprovechar al máximo nivel estos fondos», añade.

En su opinión, parece oportuno algún tipo de «reprogramación» de



Carlos Fernández Carriedo, durante su intervención de ayer. SANTI OTERO

los fondos para adaptarlos al contexto actual en el que ya no solo está en juego la recuperación económica tras la crisis sanitaria, sino que las empresas están influidas por la subida de los costes energéticos, por la inflación y por la dificultad de acceso a los stocks.

En la inauguración ha hecho hincapié en que las administraciones públicas tienen que acudir, pero también las empresas privadas. Estos fondos, que surgen de la necesidad de recuperar la economía tras la crisis sanitaria, ponen de manifiesto la responsabilidad que ha asumido la Unión Europea, «mayor que en otras crisis económicas».

Carriedo recuerda que no se trata solo de recuperar «los niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia, que en Castilla y León ya lo hemos conseguido, o alcanzar el nivel de PIB de antes de la crisis, algo que no hemos conseguido todavía». Así, apunta que es el momento de hacer las reformas que son necesarias para «plantear los retos que tenemos por delante». Entre ellas está la digitalización y la introducción de nuevas tecnologías, así como todo lo que tiene que ver con la economía circular y sostenible.

En el contexto de la crisis sanitaria, era importante que las empresas asumieran esta «transformación», pero con el agravamiento de la situación por la guerra de Ucrania es imprescindible, opina el responsable de la administración regional. «A la recesión económica, se ha sumado el efecto de la subida de la inflación, los precios de la energía y la dificultad de acceso a las materias primas», añade, a la vez que recuerda que la economía se enfrenta a una posible retirada

de los estímulos por parte del Banco Central Europeo y a la subida de los tipos de interés.

Por último, recuerda que las líneas de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) «tienen mucho que ver» con la economía de Castilla y León y «es una buena noticia». De esta manera, indica que algunas de las áreas que van a ser financiadas «de forma especial» son los sectores del automóvil, el agroalimentario, las ciencias de la salud, el aeronáutico y el químico-farmacéutico, el español, los cuidados y el hidrógeno verde. «Son sectores en los que Burgos tiene una especialización», sostiene.

ANTICIPACIÓN

Tenemos que estar preparados, tener todo listo, anticiparse», subrayaba ayer Manuel Vaca, socio de la consultora Mazars. A expensas de que España reciba este año alrededor de 18.000 millones de euros, Vaca aprovechó su intervención para poner de manifiesto que los requerimientos de las empresas -independientemente de su tamaño- no se adecúan a la «velocidad a la que va la Administración central a la hora de inyectar esos fondos».

En el caso de Castilla y León, la consignación es de las más bajas del país (6,5 millones). Tampoco pasó por alto el representante de Mazars las consideraciones fiscales del marco Next Generation. De entrada, dejó claro que se dirigen específicamente a proyectos con un «efecto innovador» porque «si lo que pretendo es hacer lo de siempre estos fondos no están destinados para ello».

Como es lógico, Castilla y León centrará sus esfuerzos en la capta-

ción de fondos para sus sectores estratégicos. Y es ahí donde entra en juego el PERTE Agroalimentario, cuyo principal objetivo es garantizar que el sector sea «más competitivo» y «sostenible», con capacidad para «mejorar su trazabilidad y seguridad» mientras trata de «contribuir al reto demográfico».

Bajo esa perspectiva, la directora del Departamento de Cooperación y Fondos Europeos de Mazars, Josefina Piñón, detalló que los más de 1.000 millones de inversión pública destinados a este apartado se sustentan en el «fortalecimiento industrial» del sector, su «digitalización» y el avance en I+D+i para «proyectos de vanguardia». Sobre los impactos esperados, más allá del plano «medioambiental, económico y social», puso el foco sobre la «generación de empleo» y la obligación de «rendir cuentas».

Por su parte, la responsable de Fondos Europeos de Ibercaja, María Teresa Ruiz, resaltó en la importancia de «dar prioridad» a la gestión de las ayudas porque «tienen un marco acotado». Las fechas clave, según recordó, son el 31 de diciembre de 2023 (fin del plazo para comprometer las ayudas no reembolsables) y la misma fecha en 2026 (fin del Plan de Recuperación).

«Es el momento de plantearnos qué es lo que necesita el sector agroalimentario, que se enfrenta a retos muy importantes». En este sentido, Ruiz precisó que, al margen de la demanda global en un entorno «hipercompetitivo» -sobre todo en términos de «alimentación saludable», las entidades bancarias deben «anticipar las ayudas» y «definir los préstamos que completen la inversión».

Escrivá amplía el 'paro' de los autónomos a cuatro supuestos distintos

La CEOE mantiene su rechazo al nuevo sistema de cotización a la espera de la oferta que enviará el Gobierno esta semana para buscar el acuerdo

LUCÍA PALACIOS

MADRID. El Gobierno intenta acercar posturas con los autónomos cuando falta menos de un mes para que termine el plazo acordado con Bruselas para tener listo el nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales que se aplicará a partir de 2023. Pero por el momento sin éxito.

La patronal persiste en su rotundo rechazo a la propuesta de cuotas que hay encima de la mesa. Por ello el Ministerio de Seguridad Social se ha comprometido a enviar esta semana un nuevo documento en el que se incluyan las peticiones realizadas en la reunión mantenida ayer, según informó a este periódico el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien advirtió que si el nuevo texto no se acerca a la propuesta de los empresarios y rebaja las cotizaciones de los que ganan más

de 1.700 euros «será muy difícil un acuerdo» con la CEOE.

Sin embargo, si ha habido avances en lo referente al nuevo sistema de protección que amplía y mejora las prestaciones de los trabajadores por cuenta propia. El acuerdo aquí sí parece estar casi cerrado, según fuentes cercanas a la negociación.

La filosofía de los ERTE

El departamento dirigido por José Luis Escrivá presentó un nuevo esquema que incorpora la filosofía de los ERTE e incluye cuatro modelos distintos de cese de actividad, el denominado 'paro' de los autónomos, según avanzó el presidente de UPTA, Eduardo Abad. Así, el cese extraordinario que se puso en marcha durante la pandemia se convertirá en permanente para aquellos casos donde se requiera de un rescate especial como, por ejemplo, el cierre de la hostelería que se decretó durante esta crisis sanitaria.

Por su parte, el tradicional cese de actividad ordinario -hasta ahora la única prestación existente- se reestructura y amplía a tres esquemas diferentes. Así, habrá un cese sectorial para actividades que puedan estar especialmente damnificados por el motivo que sea, un cese ordinario de fuerza mayor para los autónomos que tengan una situación de debilidad o fragilidad en su negocio y, finalmente, un reforzamiento para todos los autónomos que de manera temporal tengan que suspender su actividad.

En cualquiera de estos esquemas de protección el autónomo percibirá el 50% de su base de cotización durante seis meses. Eso sí, tendrá que demostrar una pérdida de facturación del 75% y rentas inferiores al SMI.

Los emprendedores con caídas de facturación del 75% percibirán el 50% de su base reguladora durante seis meses

La patronal exige a Seguridad Social rebajar las cuotas de quienes ganan más de 1.700 euros al mes, unos 800.000



El líder de CC OO, Unai Sordo (c.), junto a la ministra Yolanda Díaz y su homólogo de UGT, Pepe Álvarez. EFE

Los sindicatos, contra la OCDE: habla de pensiones «como de canguros»

Critican que esta institución pida que no se revaloricen todas las prestaciones con el IPC porque «atenta contra la viabilidad» del sistema

LUCÍA PALACIOS

MADRID. Nuevo tirón de orejas al Gobierno por la reforma de las pensiones aprobada este mismo año. La OCDE se suma a la petición que hacen instituciones como la Comisión Europea y el Banco de España para que el Ejecutivo dé marcha atrás y no suba este año las pensiones con el IPC en un escenario de inflación disparada, puesto que esto aboca a una Seguridad Social en números rojos a destinar un ingreso extra de más de 10.000 millones al pago de las nóminas en 2023.

Los sindicatos rápidamente arremetieron contra las palabras

del responsable de pensiones del 'club de los países ricos', Hervé Boulhol, que defendió en una entrevista con 'El Mundo' que existen «argumentos evidentes» para desmarcarse de la ley que liga las pensiones con el IPC medio, ya que 2022 «es un año excepcional». Las principales razones las resumió en una: «atenta contra la viabilidad financiera y la equidad intergeneracional», ya que la previsión es que la inflación puede terminar en el entorno del 7,5%, según el Banco de España, aunque el Ejecutivo lo rebaja al 6,1%. Eso sí, apuesta por cumplir la ley de indexación pero solo para las pensiones más bajas, al igual que hace el supervisor.

«La OCDE no pinta nada en esto. Es como si yo opino de la reproducción asistida de los canguros», dijo muy enfadado el secretario general de CC OO, Unai Sordo. Este dirigente sindical reiteró una vez más que las pensio-

nes se tienen que revalorizar en función de los precios, así como los salarios, por lo que «no contemplamos otro escenario».

En esta misma línea, el líder de UGT, Pepe Álvarez, cargó contra la OCDE e instó a esta institución a reflexionar sobre si se puede sobrevivir con esta inflación. En lo que no tiene duda alguna Álvarez es en que «se puede y se debe» subir las pensiones con el IPC. Entre los argumentos para ello apuntó a que se ha incrementado la recaudación, ha aumentado el salario mínimo y suben los sueldos. «Lo que posibilita que se pueda pagar el aumento de las pensiones».

Por otra parte, el secretario general de UGT arremetió también contra el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, por pedir ahora que se trate este tema en el Pacto de Toledo. «Es una falta absoluta de respeto a los acuerdos firmados», criticó.

El Gobierno descarta incluir en el plan anticrisis la subida de las pensiones pactada con Bildu

En el Ejecutivo y el PSOE reprochan al ministro Escrivá que acordara, sin contar con Hacienda, un alza del 15% para las prestaciones no contributivas

PAULA DE LAS HERAS

MADRID. El Gobierno no contempla hoy por hoy incluir una subida del 15% para las pensiones no contributivas en el real decreto de prórroga del plan anticrisis anunciado la semana pasada por Pedro Sánchez, como pretendía EH-Bildu. La medida fue negociada con los secesionistas vascos por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a cambio de su abstención en la votación, el jueves 2 de junio, del dictamen de la ley que regulará el fondo de promoción pública de planes de pensiones de empleo en las empresas; una norma de enorme importancia porque forma parte de los compromisos adquiridos con Bruselas para recibir los fondos europeos. En Moncloa, sin embargo, advierten de que el ministro se excedió en sus concesiones.

Era ya un secreto a voces que en el PSOE había causado malestar el modo en el que Escrivá ha gestionado la tramitación de esta ley, que este jueves se somete al pleno de Cámara baja. El partido achaca en parte a su manera de negociar, criticada también por socios y rivales, la caótica votación celebrada la semana pasada en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En ella, los socialistas llegaron a aceptar por error enmiendas de Unidas Podemos para destapar las pensiones y para que las aportaciones de las empresas a los planes coticen, en clara contradicción con lo que se habían acordado con formaciones como Ciudadanos. Aunque también reprochan al presiden-



José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en una intervención en el Congreso. EP

te del órgano parlamentario, Antonio Gómez-Reino Varela (UP), la mala organización del debate.

Perplejidad

En el PSOE subrayan que ni siquiera era necesario garantizar que Bildu no votara en contra en esa fase concreta de la tramitación, como hizo el ministro, porque al recabar el voto a favor del PNV, de los regionalistas cántabros y de Unidas Podemos —que mantuvo en duda su apoyo hasta el último momento—, ya alcanzaban la mayoría necesaria para salvar el dictamen. Sin el error del grupo socialista, Ciudadanos probablemente se habría decantado por el 'sí'. Y, además, existía un colchón importante: la abstención de Vox. Otra cosa habría sido amarrar el aval para la votación en pleno, pero según Bildu su

compromiso no iba, de entrada, más allá de la comisión.

En el Gobierno admiten que el comunicado de los secesionistas vascos, que fueron quienes dieron a conocer el pacto, causó cierta perplejidad porque ningún ministro alcanza acuerdos de semejante calado sin contar con el Ministerio de Hacienda. Y en este caso, según apuntan también fuentes socialistas, María Jesús Montero no estaba en la jugada. Subir las pensiones no contributivas un 15% afectaría a unas 445.000 personas y tendría un coste de 29,2 millones al mes que, multiplicado por siete pagas hasta el 31 de diciembre supondría 204 millones de euros. Pero si también se incluyeran las pensiones de viudedad y orfandad, algo que daba a entender Bildu, la cifra se dispararía (hay más de

2,3 millones de viudas que cobran la prestación).

Ahora el Ejecutivo busca cómo deshacer el entuerto sin indisponer a un socio que fue clave para sacar adelante el anterior decreto anticrisis y otras importantes leyes. Que la medida no tendrá cabida en la prórroga del paquete de 16.000 millones de euros aprobado en marzo —el que incluye la rebaja de 20 céntimos por litro de carburante reposta-

do o la rebaja del IVA de la luz— está decidido, según fuentes del Ministerio de la Presidencia. Que se vaya vehicular de otro modo está, de acuerdo con otras fuentes consultadas, aún en debate.

En el PSOE y el Gobierno apuntan, en todo caso, que lo que no corre peligro es justamente la ley de Escrivá. Los socialistas registraron este lunes un voto particular para corregir su patinazo con la aprobación de las enmiendas de Unidas Podemos y dan por hecho que contarán con el apoyo del PP y Ciudadanos para sacarlo adelante. Una vez rectificado el dictamen, creen que la formación de Inés Arrimadas votará a favor y que los populares podrían pasar de su 'no' en la comisión a una abstención. Con quien saben que no podrán contar en ningún caso es con ERC.

LA CLAVE

EN BUSCA DE LA FÓRMULA

Los socialistas buscan cómo deshacer el entuerto ahora sin indisponer a los secesionistas, socio clave

RAPAPOLVO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

El Gobierno infravalora en 1.074 millones el agujero de los ICO

- El órgano fiscalizador sostiene que Hacienda usa el «escenario más favorable» para calcular el deterioro de los préstamos con aval público
- Uno de cada cinco euros de estos créditos está ya en riesgo de impago

DANIEL CABALLERO / BRUNO PÉREZ MADRID

El Tribunal de Cuentas considera que el Gobierno está minimizando en sus estimaciones las potenciales pérdidas para las arcas públicas que se pueden derivar de las líneas de avales puestas en marcha a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante la pandemia, que según el último balance oficial han conseguido movilizar 138.501 millones de euros de financiación bancaria hacia empresas en dificultades, de los cuales 105.452 millones están garantizados por el Estado.

El organismo encargado de fiscalizar las cuentas públicas advierte en su análisis sobre la contabilidad del Estado del año 2020 de que el Ministerio de Hacienda se ha decantado por el «escenario más favorable de valoración de las potenciales pérdidas» por este instrumento, y que incluso sobre la base de la propia metodología utilizada por el Gobierno las coberturas para hacer frente a las pérdidas por los potenciales fallidos en las devoluciones deberían ser un 25% superiores a las estimadas desde el Estado.

El Tribunal de Cuentas destaca que a cierre de 2020 -último ejercicio para el que existen datos oficiales- Hacienda había provisionado 4.260 millones de euros para hacer frente a los impagos que se puedan derivar de las líneas de avales del ICO, cuando incluso aceptando la favorable metodología escogida por Hacienda estas coberturas deberían ser superiores en 1.074 millones de euros y superar holgadamente los 5.300 millones de euros.

Según el órgano fiscalizador, la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda realizó este cálculo basándose en un informe de análisis sectorial del Banco de España que estimó una tasa de mora del 10% sobre el volumen total de la financiación concedida y una tasa de impago del 60% sobre la morosidad total. En opinión de los consejeros del Tribunal de Cuentas, ese cálculo no está suficientemente fundamentado, no se sostiene

en un análisis comparado que señale esa metodología como la más afín y, además, «está rodeada de una gran incertidumbre debido, entre otros factores, a la propia naturaleza y persistencia de la crisis generada por el Covid, a la existencia de largos períodos de carencia en los créditos avalados y al reducido período de tiempo transcurrido desde su concesión».

Morosidad al alza

Más allá del tirón de orejas que asesta el Tribunal de Cuentas al Gobierno, la evolución de la morosidad muestra que lo dotado en 2020 se ha quedado ya corto, incluso antes de que terminaran por completo los períodos de carencia y sin tener en cuenta que hay préstamos con vencimiento único que todavía no han de ser amortizados.

En su último informe de estabilidad financiera, el Banco de España desveló que los préstamos avalados por el ICO estaban empezando a aflojar problemas, pese al colchón de carencia que han disfrutado. «Los préstamos garantizados por el ICO concedidos a empresas y empresarios individuales han registrado un deterioro adicional en el segundo semestre de 2021», señala el documento.

En este sentido, la institución cuan-



Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno // JAIME GARCÍA

tificó a cierre de 2021 que los créditos dudosos de los ICO habían llegado al 3,5%. Esto supone alrededor de 3.000 millones de euros ya con esa etiqueta; se considera que un préstamo es dudoso cuando existen señales de que no podrá devolverse o si han pasado más de 90 días sin que se hayan pagado las cuotas acordadas. En otras palabras, 3.000 millones de euros en créditos que ya no se están devolviendo. En la actualidad, el porcentaje de

aval público sobre los créditos, de media, asciende a un 76%. Tomando en consideración que ya hay 3.000 millones en impago, el Estado está asumiendo por ellos unas pérdidas de 2.280 millones.

Las provisiones que ha realizado el Gobierno ascienden a 4.260 millones, aunque esto abarca solo lo que se ha dotado hasta 2020. No existen datos sobre si Hacienda ha incrementado dicha cifra. Sea como fuere, la moro-

GOLPE EN LAS HIPOTECAS VARIABLES

El euríbor revienta las provisiones y alcanza ya el 0,5%

D. CABALLERO MADRID

Las estimaciones de las casas de análisis para tratar de prever el comportamiento del euríbor se quedan obsoletas a cada día que pasa. El índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas en España no para de ascender y el dato diario ya se situó ayer por encima del 0,5%.

Esto supone enfilar cifras no vistas desde mediados de 2014, aunque es cierto que la cifra que se utiliza

para actualizar el interés de las hipotecas variables es la media mensual. Sin embargo, la media también entra en terreno complicado para los hipotecados ya que en los pocos días que llevamos de junio ya se sitúa casi en el 0,47%.

En el mes de mayo el índice cerró en el 0,287%, pero la escalada viene de algunos meses atrás. En enero aún se situaba en valores negativos en el -0,477%. En abril regresó por prime-

ra vez desde 2016 a positivo y desde entonces no ha parado de subir, lo que obliga a actualizar continuamente las provisiones de hasta dónde podría llegar.

Según el panel de Funcas de mayo, que aglutina a la mayor parte de casas de análisis que realizan estimaciones, el euríbor debía estar en el 0,19% al cierre del segundo trimestre y en el 0,41% al acabar el tercero. Ambos datos ya se han superado con la media que lleva en junio y apunta ya al 0,63% que esperan los expertos que llegue a final de año. Y todo ello dependerá también de cuándo y cuánto suba los tipos de interés el Banco Central Europeo (BCE) a partir del mes de julio.

ABC (7/06/2022)

LAS CLAVES

Provisiones

La cifra de provisiones realizada por el Gobierno asciende a 4.260 millones de euros, sobre un volumen de avales de 71.000 millones. El Ejecutivo no aclara por qué utiliza para su cálculo esta última cantidad cuando en realidad las garantías públicas a cierre de 2020, el año analizado, eran mucho mayores.

Cantidad de avales

A fecha 30 de abril de 2022 -último dato disponible-, conjuntamente las líneas de avales para liquidez e inversión han desplegado avales por importe de 105.452,50 millones de euros que han permitido movilizar 138.501,80 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.176.752 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos.

Morosidad del sector

La morosidad de la banca no ha parado de caer pese a la pandemia. Esto se debe a las carencias y moratorias en los créditos, incluidos los ICO. Está ahora en el 4,15%, pero la tendencia es que aumente próximamente. En los créditos avalados está en el 3,5%, pero un 20% está en vigilancia especial, es decir, en riesgo de entrar en dudoso.

La morosidad que ya tienen los ICO se habría comido ya más de la mitad de las provisiones realizadas por el Ejecutivo. Unas provisiones que, teniendo en cuenta la totalidad de avales concedidos hasta la fecha, equivaldrían en realidad a esperar una mora del 6%.

Asimismo, el Banco de España advirtió en su informe de estabilidad financiera de un aumento considerable de los créditos clasificados en lo que se llama vigilancia especial: esto son préstamos que no han entrado aún en morosidad pero que tiene riesgo de estarlo próximamente. «Se ha observado un incremento de la proporción de volumen dispuesto clasificado en vigilancia especial, que ha alcanzado el 20,2% en diciembre de 2021 (3,9 pp más desde junio 2021)», dice el documento. Uno de cada cinco euros de los préstamos ICO está en esa consideración.

«En el caso de sectores particularmente afectados por la crisis del Covid-19, y que también pueden verse fuertemente afectados por el repunte de los precios de la energía y los alimentos, se observan unas proporciones de préstamos en vigilancia especial (por ejemplo, 35,5% y 22,7% en hostelería y transporte en diciembre de 2021, respectivamente) superiores a los del conjunto de operaciones ICO, al igual que en el caso de los préstamos dudosos (por ejemplo, 6,5% y 4,5% en hostelería y transporte)», añade el informe.

El tope al gas se complica en la UE y amenaza con retrasar la bajada a julio

La Comisión Europea admite complejidad técnica y mantiene el retraso de casi un mes en su aval definitivo a la excepcionalidad ibérica

J. CAMARERO / O. HERNÁNDEZ

MADRID / BRUSELAS. La Comisión Europea sigue estudiando minuciosamente los decretos que España y Portugal remitieron a Bruselas hace casi un mes para autorizar el límite al precio del gas en el mercado mayorista que permitirá amortiguar la subida de la luz en ambos países. Pero la excepcionalidad ibérica —como así se denomina a la medida autorizada por el Consejo Europeo de finales de marzo— se encuentra atascada en los despachos comunitarios. No hay ninguna señal que anticipe que vaya a ser en los próximos días cuando la UE avale esta iniciativa.

Aunque el 'sí' podría llegar en cualquier momento, el análisis de los decretos —muy observado también de cerca por el resto de socios europeos, sobre todo los de Europa Central y del Este, con Alemania a la cabeza— se ha «complicado» con el paso de los días, según apuntan varias fuentes del mercado energético. Bruselas quiere un tratamiento normativo calco a ambos lados de la frontera de la Península. Y ese encaje se hace difícil con dos textos legales completamente distintos (el decreto español tiene más de 60 páginas y el portugués menos de 10), así como dos sistemas heterogéneos.

Cuadrar una autorización que sirva a ambos países es el reto que tiene delante la Comisión. Fuentes europeas aseguraban hace un mes que la Comisión Europea, en un principio, podría adoptar decisiones separadas respecto a los planes presentados por España y Portugal. Desde hace varias semanas se habla de «trabajo a nivel técnico» y de «pulir

detalles técnicos» para la aprobación. Pero el Ejecutivo comunitario no da ninguna estimación de cuándo podría dar luz verde a la excepción ibérica.

Los retrasos y la espera a la respuesta comunitaria se acumulan mientras desde el Gobierno insisten en la necesidad de tener cuanto antes un aval sin el cual no se puede poner en marcha la limitación del gas en el mercado diario. El presidente del Gobierno indicaba la semana pasada, en el transcurso de la última cumbre europea, la necesidad de «reconocer el trabajo que está haciendo el Ministerio de Transición Ecológica» por el trabajo «intenso que está llevando a cabo». «Espero que el acuerdo final sea muy pronto», afirmó Sánchez, para quien esta medida es «fun-

damental» para la economía de las familias y de las empresas.

El mecanismo es complejo porque se trata de la primera vez que se establece la posibilidad de que

dos países no se rijan por las mismas reglas que el resto de socios en el mercado eléctrico. La propuesta fijaba un precio máximo inicial del gas de 40 euros/MWh para después pasar progresivamente al techo de los 50 euros/MWh; de media, a lo largo del próximo año, algo más de 48 euros/MWh. El gas cotizaba ayer en torno a los 83 euros/MWh en el mercado holandés, donde fija su referencia esta materia prima.

Un descuento medio del 15%

A medida que transcurren los días (el primer anuncio fue en marzo), los consumidores dejan de percibir el posible efecto del tope al gas. Cuando Bruselas autorice el límite al precio mayorista del gas, los hogares acogidos a la tarifa regulada (unos 10 millones

de puntos en España, un 38% del total) no comenzarán a percibirlo en sus recibos hasta que, al menos, no transcurra un mes completo tras autorizarse el tope.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica aclaran que el efecto práctico «depende del cierre del período de facturación de los consumidores a los que beneficiará». Por ello, serán necesarios al menos 30 días para comprobarlo en el recibo. Del ahorro que inicialmente se cifraba en torno a un 30% en la factura de la luz, el Gobierno está empezando a hablar de que la rebaja que se va a notar será del 15%. La propia vicepresidenta, Teresa Ribera, admite que ese ahorro «puede no ser de las dimensiones que nos hubiera gustado».

Mientras tanto, el Ejecutivo no cree que en los próximos meses pueda haber «falta de suministro» de gas pese a la amenaza de una subida de los precios del procedente desde este país. Así lo indican en una respuesta parlamentaria, recogida por EP, al hilo de las relaciones con un «socio fiable» como Argelia.

PRECIO DE LA LUZ

200

euros/MWh es el coste medio de la electricidad en la primera semana de junio, unos precios que supone un 140% más que los registrados hace un año. Con el tope del gas el 'pool' diario podría caer a 130 euros/MWh, un 35% menos que los costes actuales.



Una planta de gas en Tarragona junto al mar Mediterráneo. DAMIÁN TORRES

El petróleo, anclado en los 120 dólares por barril, anticipa nuevas subidas de combustibles

J. M. CAMARERO

MADRID. La cotización del petróleo en los mercados internacionales sigue sin dar tregua a los conductores españoles que van a repostar a las estaciones de servicio, a pesar de la bonificación de 20 céntimos de euro en vigor. En el inicio de la semana, el cru-

do ha mantenido la volatilidad de las últimas jornadas. Ayer se movió en el entorno de los 120 dólares por barril, aunque finalmente descendió un 1% para situarse en los 119 dólares.

La reapertura de la economía china, tras un nuevo parón motivado por la política de covid-cero de sus autoridades para ata-

jar los brotes surgidos en las últimas semanas, ha supuesto un revulsivo para la demanda mundial de petróleo, lo que ha impulsado los precios. También lo hacen las sanciones energéticas de la UE a Rusia por invadir Ucrania y el hecho de que se acerca el verano, cuando el consumo de combustibles sube en España.

Con todos estos ingredientes, los precios de los combustibles siguen incrementándose. Y previsiblemente lo harán en los próximos días, cuando vayan recogiendo las últimas subidas de la cotización del crudo hasta los 120 dólares actuales. El de la gasolina-95 se aproxima ya a los 2,10 euros por litro, de media. Ayer se vendía en el entorno de los 2,08 euros, lo que supone prácticamente 25 céntimos más que cuando se puso en marcha el plan anticrisis. Es decir, ya se han comido todo el efecto de las ayudas

oficiales. En el caso del diésel se encuentra, de media, en los 1,96 euros por litro, lo que supone nueve céntimos más del precio que marcaba a principios de abril.

El mercado también espera que los países productores (la OPEP y Rusia) pongan en marcha el 1 de julio el incremento de barriles acordado la semana pasada. A la vez, las autoridades estadounidenses han emitido licencias para que las petroleras Repsol, Chevron (EE UU) y Eni (Italia) puedan exportar petróleo y gas natural desde Venezuela.

Trabajadores extranjeros

El objetivo de cubrir vacantes del mercado laboral con mano de obra inmigrante no debe mermar la calidad de los empleos

Las carencias del mercado laboral español son múltiples y requieren una solución combinada y multifactorial porque el problema ni es nuevo ni tiene solución inmediata. Hoy hay en torno a 109.000 empleos sin cubrir, según la patronal, que es mucho menos (un 0,7% sobre la población afiliada) que la media europea (2,6%), pero su alza ha sido constante en los últimos años. En la construcción hay 30.000 vacantes y la búsqueda de jefes de obra es casi misión imposible, según las empresas del sector. A la vez, con un 13% largo, España es el país con un dato de paro más elevado en la eurozona: a pesar de su disminución constante, la cifra duplica el promedio europeo. Pero eso no impide que aflore el problema de las numerosas vacantes que los empresarios no logran cubrir.

El borrador del nuevo reglamento de extranjería que prepara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da un paso importante e incorpora una buena dosis de ambición para abordar la enorme cantidad de cuestiones pendientes en este ámbito. Casi todo está por hacer porque las contradicciones del mercado laboral español relacionadas con los inmigrantes son muy amplias y tradicionalmente difíciles de gestionar. El borrador del nuevo reglamento de extranjería se asienta en tres pilares: impulsar la contratación de trabajadores en origen (lo que debe permitir planificar mejor y desincentivar las terribles rutas de inmigración irregular); favorecer la regularización de inmigrantes ya instalados que asuman la mejora de su formación con el objetivo final de aflorar la economía sumergida, y posibilitar que los jóvenes extranjeros que estudian en España (algo más de 55.000 personas) dejen de tener prohibido compatibilizar trabajo y estudio.

Los sindicatos mayoritarios han reaccionado

a la propuesta del ministro Escrivá con una descalificación ideológica —por “clasista”— y han reclamado con razón un marco negociador con Gobierno y empresarios que los incluya. La protección de los intereses de los trabajadores es compatible con la mejora del sistema en su conjunto, incluida la contratación legal y en condiciones de mano de obra inmigrante para puestos que no cubre el trabajador local. El problema es objetivo y real, y lo es de forma más acusada, en efecto, en ámbitos laborales con menor valor añadido y salarios más bajos —como la agricultura o la hostelería—, pero también en otros de alta cualificación profesional, como en las tecnologías digitales o las energías renovables. Adelantarse a la falta de mano de obra en las empresas y regular las contrataciones en origen, además de fomentar la regularización de los ya instalados en España vía formación profesional, contribuye a la integración social de una migración que no va a desaparecer y compensa tanto la ausencia de mano de obra local como el envejecimiento de la población.

Es verdad que el riesgo de un exceso de focalización de la oferta de los trabajos más duros en los inmigrantes debe ser prevenida a través de controles que garanticen la equiparación de condiciones entre unos y otros, para no tirar a la baja los salarios en un país que hace 10 años ya sufrió una devaluación considerable. La urgencia económica de las medidas es una motivación de peso, pero lo es también facilitar la vida de mucha gente que hoy subsiste bajo un sistema que asume el trabajo mal pagado en negro y niega a la vez los derechos a los trabajadores. Ajustar las medidas de modo que puedan eludirse sus potenciales efectos nocivos podría ser el empeño de una deseable negociación que incluya tanto a empresarios como a sindicatos.

El Gobierno busca acotar el desperdicio de comida con prevención y multas

Los restaurantes informarán a los clientes de que se pueden llevar las sobras

EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO, Madrid
Los hogares españoles tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos, una media de 31 kilos por persona, según datos de 2020 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Gobierno quiere parar este despilfarro. Con ese objetivo, el Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, antes de remitirlo a las Cortes y someterlo a tramitación parlamentaria. Entre las medidas que introduce esta ley está la de obligar a todos los agentes de la cadena alimentaria a elaborar un plan de prevención para evitar el desperdicio. Además, contempla sanciones para restaurantes o supermercados que no cumplan esta norma, según el texto de la norma al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Esos planes de prevención de-

ben jerarquizar el uso que se da a los alimentos antes de llegar al vertedero. El prioritario, explica el ministerio, debe ser el consumo humano mediante la donación a entidades como los bancos de alimentos. Las empresas estarán obligadas a suscribir convenios con las organizaciones receptoras que especifiquen las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte. El ministerio incide en la importancia de la trazabilidad de la comida donada.

De no ser posible entregar la comida para consumo humano, dichos alimentos se deben transformar en otros productos como zumos o mermeladas. La tercera opción es que sirvan para la alimentación animal. Los últimos usos que debe detallar el plan son la elaboración de subproductos industriales y el reciclado para obtener compost o combustibles.

La norma recoge más medi-



Una persona hace compost de las sobras de comida. / GETTY

das para evitar el despilfarro: las empresas tendrán que informar anualmente de cuánto desperdician; los restaurantes deben notificar a los consumidores que pueden llevarse sus sobras; las empresas han de incentivar con precios inferiores la venta de productos con fecha de caducidad próxima.

En octubre de 2021, cuando el

Gobierno aprobó el anteproyecto de esta ley, adelantó las sanciones a las empresas que no respeten esta norma, con multas de entre 6.001 y 150.000 euros para las infracciones graves. Las causas para incurrir en estas faltas son impedir mediante estipulación contractual la donación de alimentos o no donar los excedentes a enti-

dades de iniciativa social. En caso de reincidencia, la multa puede llegar al millón de euros.

"Es una ley de convencimiento y no de coerción", comentó el año pasado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Fuentes del ministerio insisten ahora en el mismo mensaje: la vocación de esta norma no es "sancionadora", la prioridad es la "prevención".

La nueva ley no anticipa sanciones contra las personas que desperdicien en sus hogares, donde se concentra la mayor parte del derroche. Para este estrato, la norma se centra en las campañas de concienciación. Quedará establecido un modelo de buenas prácticas "para reducir drásticamente el desperdicio de alimentos", explica el Ejecutivo. Esta guía de actuación también abordará cómo desechar menos en el resto de eslabones de la cadena.

El 75% de los hogares españoles asegura que desperdicia alimentos. Esta es una de las conclusiones más contundentes del último estudio realizado por Agricultura sobre el derroche alimenticio, realizado a partir de 8.000 encuestas en 2020. De la comida que acaba en la basura, tres cuartos son productos sin elaborar, es decir, que no han llegado a ser cocinados. Y entre esos productos, los más comunes son la fruta (32,1%), las verduras y hortalizas (13,6%), el pan (4,8%) y la leche (4,5%). En torno a la mitad de los participantes en la encuesta declaró que congela parte de lo que cocina.